

C.A. de Santiago

Santiago, once de abril de dos mil veintidós.

A los folios 16 y 17: a todo, téngase presente.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que con fecha 27 de marzo del año en curso, comparecen Omaira Peláez Suarez y María Alejandra Quintero Moros, abogadas, con domicilio en Paseo Bulnes 120, Of. 89, Santiago, a favor de donã **Fiorella Liliana Ortega Mori**, de nacionalidad peruana, pasaporte N° 219029465, interponiendo acción constitucional de amparo en contra del **Servicio Nacional de Migraciones** del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por haber rechazado solicitud de regularización de la amparada y decretando el abandono del país, constituyendo dicha resolución una vulneración a su derecho a la libertad personal consagrado en el artículo 19 N° 7 letra a) de la Constitución Política de la República, solicitando que en definitiva se restablezca el imperio del derecho, dejando sin efecto la **Resolución Exenta N°156506, de 11 de junio de 2019**, por ser ilegal y arbitrario, disponiendo como providencia necesaria para restablecer el imperio del Derecho ordenar la regularización migratoria de la amparada, mediante el otorgamiento de la visa correspondiente.

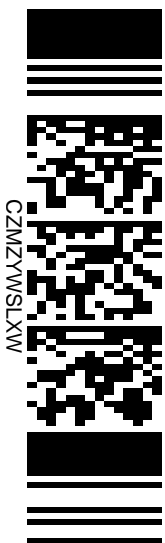
Expone que, la ciudadana peruana ingresó a Chile en calidad de turista en el año 2015. Solicitó visación de residente temporario-embarazo con fecha 26 de abril de 2016. No obstante mediante Resolución Exenta N°81275 de 28 de abril de 2016 el órgano recurrido rechazó la solicitud en atención a que registra una condena a 3 años y 10 meses de prisión por el delito de hurto agravado en su país de origen. Aclara que mediante sentencia de 29 de octubre de 2014 se le impuso dicha pena la que fue suspendida por periodo de



prueba de 2 años 8 meses fijando las condiciones de no ausentarse, comparecer mensualmente e informar y justificar actividades, no cometer nuevo delito y fijándose una suma por reparación civil. Luego, mediante resolución de 14 de septiembre de 2017 el 3° Juzgado de Investigación Preparatoria resolvió tener por no pronunciada la condena y anular los antecedentes con conocimiento de la Oficina del Registro Distrital de Condenas para los efectos de cancelación del registro de firmas y remitir los cuadernos al archivo central.

Refiere que la amparada hizo abandono del país posterior haber sido notificada de la resolución exenta. Al año y medio de nacida a su hija Ivanna Yarlett Morales Ortega le detectaron un linfagioma, ante lo cual sin encontrar especialistas en Perú para dicha patología, el padre que tiene residencia regular en Chile decidió traerla de vuelta. Recién llegada tuvo recaídas y ante desesperación del padre la amparada se vio obligada a ingresar por paso no habilitado en el año 2018. Postuló al proceso de regularización sin embargo mediante Resolución Exenta N°156506 de 11 de junio de 2019 el órgano recurrido rechazó la solicitud debido a la condena ya indicada. Interpuso recurso de reconsideración, sin embargo, hasta la fecha de presentación de esta acción no ha habido respuesta.

Explica que conforme a certificado consular de antecedentes penales de Perú de 6 de enero de 2022 la amparada “no registra antecedentes penales” por tanto la conducta delictiva se encuentra anulada de los registros de su país de origen. También sus gestiones dan cuenta de su interés y necesidad de residir en nuestro país, pero pese a ello se mantiene vigente la medida de abandono lo cual resulta discriminador y frustra el proyecto de vida que tiene junto a su



familia. Ha trabajado de manera informal, como asesora del hogar. Mantiene domicilio en la comuna de Quinta Normal junto a su cónyuge y dos hijas menores de edad de nacionalidad chilena de 6 y 4 años de edad y una hija de 19 años alumna regular de AIEP. En cuanto a su hija Ivanna hasta la fecha está en controles médicos en el Hospital San Borja Arriarán.

Finalmente, concluye que la resolución impugnada vulnera el principio de proporcionalidad y cita jurisprudencia en su favor. Además, la medida de abandono atenta contra el interés superior del niño consagrado en las disposiciones de la Convención de los derechos del niño que pasa a transcribir.

SEGUNDO: Que evacuando informe el Servicio Nacional de Migraciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública solicita el rechazo en todas sus partes del recurso, ya que la Resolución impugnada fue dictada por autoridad competente, en el marco de sus atribuciones legales, en la forma prescrita por ley y con pleno respeto a las garantías contenidas en la Carta fundamental.

Expone que la extranjera solicitó al Servicio Nacional de Migraciones Visa sujeta a contrato por primera vez, la que fue rechazada por Resolución Exenta N° 81275 de fecha 28 de abril de 2016 del Departamento de Extranjería y Migración, debido a que la extranjera presenta antecedentes negativos en su país de origen por el delito de hurto agravado, ordenando, asimismo, el abandono del país en un plazo de 15 días.

Agrega que con fecha 22 de mayo de 2019 la extranjera solicitó regularizar su situación migratoria la que fue rechazada mediante Resolución exenta N°156506, de fecha 11 de junio de 2019, fundamentándose en que registra una condena en su país de origen



por el delito de hurto agravado, manteniéndose vigentes las sanciones que tuviera impuestas.

La extranjera con fecha 07 de marzo de 2018 solicito revisión de oficio, de conformidad al artículo 142 bis del Reglamento respecto el rechazo de su solicitud de visa por primera vez. Y que mediante Resolución N° 122394, de fecha 30 de septiembre de 2021, se rechazo la solicitud de revisión de oficio porque registra una salida del territorio con fecha 10 de diciembre de 2019 como último movimiento migratorio. De lo anterior se desprende que la extranjera, no se encuentra en el país, por lo que no resulta pertinente acceder a su solicitud, toda vez que no se cumple con el objetivo del beneficio, esto es, radicarse indefinidamente en el país, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 80 del D.S.597 (Reglamento de Extranjería).

A continuación, cita los artículos 64 del DL 1094 y 138 del DS 597, que dicen relación con aquel fundamento legal objetivo en que se encuentra la extranjera de marras al tener antecedentes penales en su país de origen. Por tanto, sólo se puede concluir que esta autoridad ha obrado en el marco del derecho y no se ha vulnerado en forma alguno las garantías del extranjero en el caso de marras.

A mayor abundamiento, hace presente que en el presente caso, se han presentado diversas instancias dentro del procedimiento administrativo, en los cuales la extranjera no cumplió con lo solicitado por esta autoridad. Todos estos antecedentes de hecho y derecho fundamentan a su entender la medida migratoria impugnada, no incurriendo en un acto u omisión ilegal, ni arbitrario.

TERCERO: Que el artículo 21 de la Constitución Política de la República, consagra la denominada acción de amparo y dispone, en lo pertinente, que: *“Todo individuo que se hallare arrestado, detenido*



o preso con infracción de lo dispuesto en la Constitución o en las leyes, podrá ocurrir por sí, o por cualquiera a su nombre, a la magistratura que señale la ley, a fin de que ésta ordene se guarden las formalidades legales y adopte de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado”.

De igual forma, el inciso tercero de dicho precepto señala que *“El mismo recurso, y en igual forma, podrá ser deducido en favor de toda persona que ilegalmente sufra cualquiera otra privación, perturbación o amenaza en su derecho a la libertad personal y seguridad individual. La respectiva magistratura dictará en tal caso las medidas indicadas en los incisos anteriores que estime conducentes para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado”.*

CUARTO: Que, el asunto que se trae a conocimiento de esta Corte -y que se estima como atentatorio de la garantía constitucional de la libertad individual, lo constituye el rechazo de la solicitud del proceso de regularización migratoria de la amparada en virtud de la cual se decreta el abandono del país, mediante Resolución Exenta Número 156506 de fecha 11 de junio de 2019 del Servicio recurrido.

QUINTO: Que, el artículo 64 del DL 1094 señala que *“Pueden rechazarse las solicitudes que presenten los siguientes peticionarios: (...) Asimismo, podrán rechazarse las peticiones por razones de conveniencia o utilidad nacionales”.*

En el mismo sentido el artículo 138 del Reglamento de Extranjería indica que “Pueden rechazarse las solicitudes que presenten los siguientes peticionarios (...) Asimismo, podrán

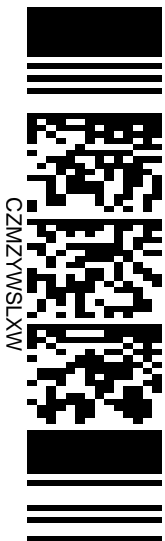


rechazarse las peticiones por razones de conveniencia o utilidad nacional”.

Además, el artículo 67 de la Ley de Extranjería, en su inciso segundo, dispone “Artículo 67.- (...) *Revocada o rechazada que sea alguna de las autorizaciones a que se refiere este decreto ley, el Ministerio del Interior procederá a fijar a los extranjeros afectados un plazo prudencial no inferior a 72 horas, para que abandonen voluntariamente el país.*”

SEXTO: Que, atendido lo expuesto en el motivo precedente, se colige que, consta en el proceso que la Autoridad recurrida, rechazó la solicitud de regularización migratoria extraordinaria, basada en los antecedentes negativos que mantiene la extranjera en el país de origen, lo que contradice la normativa migratoria vigente. Sin embargo, asiste a la extranjera -como bien lo señaló el abogado de la recurrida- la posibilidad de solicitar regularización de situación migratoria al alero de la nueva normativa establecida en la Ley N°21.325 cuya disposición contenida en el artículo 155 de dicho texto legal habilita a la ciudadana peruana para solicitar la citada regularización, esta vez, acompañando la documentación que da cuenta de la ausencia de anotaciones penales en el país de origen,

SÉPTIMO: Que, en las condiciones descritas, se desprende que la Resolución Exenta Número 156506, de 11 de junio de 2019 del Servicio recurrido, fue expedida por orden de autoridad competente, premunida de facultades para ello, observándose los procedimientos y las formalidades legales, en un caso previsto por la ley y existiendo mérito para ello, motivo por el cual, el presente arbitrio constitucional deberá ser rechazado, toda vez que no existe acción u omisión ilegal



o arbitraria que vulnere la libertad personal de la amparada en los términos alegados.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de la República, Auto Acordado sobre tramitación y fallo del Recurso que regula la materia, **se rechaza** el recurso de amparo deducido en favor de doña Fiorella Liliana Ortega Mori, en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese por la vía más rápida y archívese en su oportunidad.

N° Amparo-842-2022.



Pronunciado por la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por Ministro Miguel Eduardo Vazquez P., Ministra Suplente Ana Maria Osorio A. y Abogado Integrante Jorge Benitez U. Santiago, once de abril de dos mil veintidós.

En Santiago, a once de abril de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa.
A contar del 02 de abril de 2022, la hora visualizada corresponde al horario de invierno establecido en Chile Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>